

El tecnopopulismo en España durante la pandemia de COVID-19

Technopopulism in Spain during the COVID-19 pandemic

O tecnopopulismo na Espanha durante a pandemia da COVID-19

Alesandra Puyuelo Estrada* y Alessandro Gentile**

RESUMEN

Durante la pandemia por COVID-19, las formaciones tecnopopulistas se afirmaron en diversas democracias combinando las apelaciones al conocimiento experto y la voluntad popular como forma de legitimarse ante la ciudadanía. En España, el tecnopopulismo se vio en la gestión de la emergencia sanitaria a través del gobierno de coalición PSOE-Podemos. El objetivo de este artículo es presentar el tecnopopulismo como nueva fórmula política y comprobar de qué manera el tecnopopulismo ha incidido en el sistema de bienestar español durante y después de la pandemia. Para ello se ofrece una revisión de las contribuciones más destacadas y recientes de la sociología y de la ciencia política sobre tecnopopulismo y se ofrece un análisis de la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las intervenciones del gobierno español para proteger a los colectivos más expuestos a la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria. A través de este artículo se ha podido observar cómo el tecnopopulismo constituye un nuevo modelo de gobernanza en España que busca regenerar la inclusión social y acercar la ciudadanía a una forma de hacer política que atienda sus problemas más urgentes en un contexto de gran complejidad a nivel social e institucional.

Palabras clave:
pandemia,
Escudo Social,
Ingreso Mínimo
Vital, populismo,
tecnocracia.

* Española. Máster en Ciencias Políticas y de Gobierno, Università degli Studi di Milano. Doctoranda en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales, Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España. 715451@unizar.es ORCID: 0009-0009-6146-091X

** Italiano. Doctor en Sociología, Universidad de Barcelona. Profesor de Sociología, Universidad de Zaragoza. Zaragoza, España. agentile@unizar.es ORCID: 0000-0003-0387-9113

ABSTRACT

During the COVID-19 pandemic, techno-populist groups established themselves in various democracies by combining appeals to expert knowledge and popular will to legitimize themselves in the eyes of the citizens. In Spain, technopopulism was present in the management of health emergencies through the PSOE-Podemos coalition government. This article aims to present technopopulism as a new political approach and to examine its impact on the Spanish welfare system during and after the pandemic. In this regard, I will provide a review of the latest and most significant contributions from sociology and political science to technopopulism. Additionally, I will analyze the implementation of the Minimum Vital Income (IMV), which is one of the interventions by the Spanish government to protect the groups most affected by the economic crisis resulting from the health emergency. This article has explained how technopopulism represents a new governance model in Spain. It aims to promote social inclusion and engage citizens in a form of politics that addresses their most pressing issues within a complex social and institutional framework.

Keywords:
pandemic,
Social Shield,
Minimum Vital
Income, populism,
technocracy.

RESUMO

Durante a pandemia da COVID-19, as formações tecnopopulistas se afirmaram em diversos espaços democráticos, combinando o apelo ao conhecimento especializado e à vontade popular como forma de se legitimar perante a cidadania. Na Espanha, o tecnopopulismo pode ser visto na gestão da emergência de saúde pública através do governo de coalizão PSOE-Podemos. O objetivo deste artigo é apresentar o tecnopopulismo como nova fórmula política e comprovar como o tecnopopulismo incidiu no sistema de bem-estar espanhol durante e após a pandemia. Para isso, oferece-se uma revisão das contribuições mais recentes e de maior destaque da sociologia e das ciências políticas sobre o tecnopopulismo, bem como uma análise da implementação do rendimento mínimo vital (Ingreso Mínimo Vital, IMV), uma das intervenções do governo espanhol para proteger as coletividades mais expostas à crise económica derivada dessa emergência de saúde pública. Através deste artigo foi possível observar como o tecnopopulismo constitui um novo modelo de governança na Espanha, que procura regenerar a inclusão social e aproximar a cidadania de uma forma de fazer política que atenda a seus problemas mais urgentes em um contexto de grande complexidade a nível social e institucional.

Palavras-chave:
pandemia,
Escudo Social,
Rendimento
Mínimo Vital,
populismo,
tecnocracia.

Introducción

El populismo y la tecnocracia se han convertido en las principales formas de entender y ejercer la política en las democracias liberales (Bickerton e Invernizzi, 2021; Esmark, 2021). Estos dos conceptos, fundamentalmente considerados opuestos entre sí en el campo de la ciencia política, pueden configurar una fórmula de gobierno y de política de manera conjunta. Ambos se refieren a modelos de gobernanza que comparten una misma concepción antipluralista y antisistema de la democracia, ya que ambos contrastan la postura de los partidos políticos tradicionales (Bertsou y Caramani, 2022).

En particular, durante la pandemia por COVID-19 se confutó la idea de que el populismo era incompatible con el conocimiento experto, dado que ambos tienen una misma concepción del bien común, según la cual existen soluciones objetivas a los problemas sociales que no requieren la mediación de intereses contrapuestos.

A pesar de que diferentes analistas auguraban durante la pandemia que el apoyo público hacia el populismo disminuiría con la gestión técnica de la crisis, el populismo no ha desaparecido de la escena política (Goodwin, 2022). Más bien aumentaron y consiguieron mayor visibilidad (mediática y social) aquellos actores políticos que buscan legitimarse a través del conocimiento científico para dar respuestas efectivas a las demandas del pueblo, en pos de evitar posicionarse ideológicamente (Bickerton e Invernizzi, 2018).

Su auge en la arena política ha llevado a Bickerton e Invernizzi (2021) a sostener que las democracias occidentales están atravesadas por un nuevo discurso sin ideología definida que busca sustituir a la política tradicional, basada en la contraposición de los grandes relatos ideológicos de la historia moderna.

En el actual contexto de “crisis permanente” (Riba, 2021)¹ con la COVID-19, que se inserta dentro de los últimos 20 años de inestabili-

1 “Permacrisis” es la palabra del 2022 según el prestigioso *Collins English Dictionary*. Con este término se indica “un largo periodo de inestabilidad e inseguridad derivado de una serie de eventos catastróficos”, en referencia a la burbuja financiera de 2008, la emergencia de la COVID-19, la emergencia climática y la guerra en Ucrania. Los vértigos provocados por unas circunstancias sociohistóricas caracterizadas por el repentino pasaje de acontecimientos sin precedentes a otros de igual o incluso mayor envergadura

dades estructurales a escala mundial, ha crecido además la necesidad de protección de la ciudadanía, con un consecuente retorno del Estado de Bienestar como agente protector de referencia (Gerbaudo, 2023). Tales circunstancias han configurado el caldo de cultivo para que los actores tecnopopulistas lleguen a asumir un creciente protagonismo.

Durante la pandemia, Jäger y Zamora Vargas (2023) observaron los efectos del tecnopopulismo en el consenso entre tecnócratas y populistas sobre la necesidad de implementar la renta básica universal como forma de alcanzar un nuevo contrato social para el siglo XXI. La apuesta por este tipo de prestación incondicional, concedida a todos los ciudadanos independientemente de sus ingresos económicos (Raventós, 2021; Standing, 2018), ha sido llevada a la mesa de diversos gobiernos europeos para gestionar la emergencia pandémica y para dar un salto significativo en las prerrogativas del Estado con respecto a los sistemas universales de protección e integración social.

La renta básica pasó de ser criticada por organismos internacionales debido a su elevado coste y por la posibilidad de que lleve a desincentivar la búsqueda activa de empleo, a ser vista como una herramienta adecuada y necesaria para enfrentar no solamente la emergencia pandémica, sino también las consecuencias de la cuarta revolución industrial y el incremento de las desigualdades sociales en los países occidentales de capitalismo avanzado (Jäger y Zamora Vargas, 2023). Esta propuesta dejó de ser una alternativa al modelo de gobernanza planteado por el populismo (Standing, 2018) para convertirse en parte de su ideario, en un momento de profunda crisis del Estado de Bienestar, causada por las políticas de austeridad entre 2008 y 2014.

Asimismo se podrían vislumbrar horizontes de futuro para esta medida, si consideramos que ya vivimos en una sociedad dominada por instituciones tecnocráticas, en las que la política se entiende principalmente como una mera gestión de los problemas sociales y se le resta cada vez más importancia a las controversias ideológicas ligadas al tradicional eje de izquierda-derecha (Bregman, 2017).

son una constante en los últimos años. La globalización nos conecta continuamente con nuevas realidades y problemas que acabamos experimentando (y sufriendo) sin lograr soluciones definitivas: las crisis que se originan a miles de kilómetros de distancias del lugar donde residimos irrumpen en nuestra cotidianidad alterando las garantías básicas del sistema de bienestar social y económico que fundamenta la sociedad en que vivimos.

En este escenario, España representa un caso apropiado para analizar el tecnopopulismo y su impacto en los sistemas de bienestar durante la pandemia por dos razones. En primer lugar, porque es uno de los pocos países donde esta fórmula política ha llegado al gobierno de la nación con la coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos y, en segundo lugar, porque este mismo Ejecutivo lanzó una iniciativa muy novedosa de rentas mínimas para la lucha contra la pobreza.

Con respecto al primer punto, Podemos, que pasó a formar parte del gobierno de coalición con el PSOE en 2019, es un ejemplo típico de lo que se ha denominado “tecnopopulismo híbrido” (Bickerton e Invernizzi, 2021). Eso significa que, aunque se vea afectado por la lógica tecnopopulista, sigue manteniendo un posicionamiento ideológico explícitamente de izquierdas.

Además, con respecto al segundo punto, esta formación incluyó la renta básica universal en su primer manifiesto electoral para las elecciones europeas de 2014 (Arcarons et al., 2023), si bien aplicó una prestación menos ambiciosa como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), cuando finalmente llegó al gobierno nacional.

Estudiar las formas en que se construye el discurso tecnopopulista y cómo se plasman en la estrategia política y de gobierno resulta entonces importante por dos razones principales: 1) para entender el actual contexto sociopolítico en España con la crisis del bipartidismo tradicional y la afirmación de formaciones no conformadas mayoritariamente por políticos de profesión; y 2) para conocer los cambios que se están produciendo en torno al Estado de Bienestar en este país, que se vio muy afectado por los recortes presupuestarios implementados en la crisis financiera de 2008-2014 (Del Pino y Rubio, 2013) y que se ha beneficiado de nuevas formas de gestión de la crisis pandémica más reciente por iniciativas de actores (y por inspiración de planteamientos) tecnopopulistas.

El objetivo de este artículo es entonces estudiar el tecnopopulismo durante los años de COVID-19 en España, en especial su incidencia en las políticas sociales relativas a las rentas mínimas durante este periodo de gran complejidad a nivel social e institucional, en uno de los pocos países donde el tecnopopulismo tuvo que gestionar la crisis

sanitaria a partir de una coalición de gobierno formada por un partido socialdemócrata (PSOE) y una formación marcadamente populista (Podemos) (Saccà y Selva, 2023). Se pretende también reflexionar sobre la posibilidad de que tales intervenciones estatales —en concreto, el Ingreso Mínimo Vital— se mantengan y que el tecnopopulismo continúe ejerciendo funciones de gobierno a nivel nacional, incluso tras el fin de la emergencia pandémica.

Para desarrollar esta investigación se llevará a cabo como herramienta metodológica una revisión bibliográfica de las contribuciones más destacadas de la sociología y de la ciencia política sobre tecnopopulismo y se analizarán las contribuciones (todavía escasas) que, hasta la fecha, han abordado su reciente aparición en España.

De igual modo, se consultarán las referencias bibliográficas y las fuentes primarias más relevantes relativas al Ingreso Mínimo Vital y la situación de la lucha contra la pobreza en España. En particular, la Segunda Opinión realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef, 15 de junio de 2023), que ofrece los datos oficiales más recientes sobre la implementación de esta medida de lucha contra la pobreza en España, los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE, 2024a) y también los datos relativos a la Encuesta de Población Activa ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2024b).

Con esta revisión bibliográfica se pretende realizar un estado de la cuestión sobre el tecnopopulismo, actualizando y problematizando este fenómeno de gran interés en las ciencias sociales para comprender los cambios que se producen en las formas de practicar y pensar la política en diferentes democracias alrededor del globo y, en especial, en nuestro caso de estudio España, donde el tecnopopulismo parece estar convirtiéndose en una nueva forma de gobernanza.

El artículo se organiza de la siguiente manera: en la primera parte se desarrolla y explica el concepto de tecnopopulismo como nueva lógica política en las democracias occidentales; en la segunda parte se describen las principales medidas adoptadas por el primer gobierno de coalición en España en materia de protección social durante la crisis por la COVID-19. En las conclusiones reflexionamos sobre la

incidencia de esta fórmula política en España para el futuro próximo, en línea con los hallazgos señalados para este específico caso de estudio.

¿Una nueva lógica política en un contexto de múltiples crisis?

El tecnopopulismo como concepto de la teoría política contemporánea surge en los años noventa del siglo pasado. Esta fórmula aparece vinculada a la idea de que los partidos políticos de masa desaparecerían por el auge de las nuevas tecnologías informáticas más avanzadas, como medios capaces de potenciar la tecnificación de la realidad y, en consecuencia, el proceso de desideologización en un mundo cada vez más complejo e interconectado, pero también más individualista y atomizado.

Se trataría de un nuevo imaginario político que configura el mundo con un enorme potencial transformador, al vislumbrar una participación en la arena pública que prácticamente no presenta más filtros de lo que precisa tener una mínima habilidad con las herramientas informáticas. Ocuparse de la “cosa pública” se vuelve más accesible con la mera navegación en las redes virtuales, en remoto y de forma discrecional, cada uno desde su particular posición de usuario de la web y en una realidad cada vez más interconectada (Lipow y Seyd, 1995).

En consecuencia, el tecnopopulismo cambiaría el modelo de concebir y practicar la política, sin precisar de mediaciones institucionalizadas como las que suelen propiciar los grandes partidos en las democracias parlamentarias. Sin embargo, en sus inicios, en el seno de la cultura *hacker*, el tecnopopulismo no tuvo éxito y desapareció de la literatura especializada sobre el tema hasta después de la Gran Recesión del 2008; es decir, hasta que se planteó la necesidad de buscar formas alternativas de practicar la política que fueran capaces de gestionar las crisis cíclicas que el capitalismo neoliberal experimentaba en todo el mundo (Deseriis, 2017).

La aparición de protestas como el Movimiento 15-M o de los Indignados en España o el movimiento Occupy Wall Street en Estados Unidos, además de las manifestaciones ligadas a la Primavera Árabe (2010-2012), mostró el descontento generalizado de la ciudadanía glo-

bal ante un contexto de profundas crisis económicas y de importantes reconfiguraciones geopolíticas, y la necesidad de nuevas formas de representación y organización a través de las tecnologías de la información (Deseriis, 2017).

Para Gerbaudo (2018) las nuevas tecnologías contribuyeron al fomento de formaciones populistas, debido a la arquitectura de las redes sociales, que privilegia el mantenimiento de la atención ciudadana sobre determinados temas de índole emocional, auspicia una movilización espontánea que crece exponencialmente en los canales virtuales, y busca soluciones rápidas y efectivas a problemas nuevos y de acuciantes actualidad (como, por ejemplo, la precariedad laboral, la propiedad intelectual y la participación directa en la gestión de la “cosa pública”).

Así el tecnopopulismo (conocido también como “ciberpopulismo” en sus albores) detecta aquellas cuestiones que suscitan mayor malestar ciudadano en las democracias y crea nuevos relatos que liberan emociones de alta intensidad populista: el objetivo es hegemonizar las conversaciones en las redes virtuales para dominar digitalmente la política analógica.

Siguiendo a Deseriis (2017), el Partido Pirata (Islandia y Alemania), Podemos (España) y el Movimiento Cinco Estrellas (Italia) son ejemplos de este tipo de formaciones en Europa, que combinan la “ideología californiana”,² también llamada tecnolibertarismo (Barbrook y Cameron, 1996), con el populismo.

Esta noción expresa la relación entre populismo y las nuevas tecnologías de la información como forma de alcanzar, mantener y gestionar el poder político. Se configura así una nueva familia de partidos y movimientos sociales, caracterizada por la forma en que sus miembros mezclan elementos antisistema y antipartidistas con apelaciones a competencias técnico-científicas que a menudo se pueden adscribir al mundo de la infoesfera, para eludir el conflicto ideológico y legitimarse ante los ciudadanos.

2 Ideología nacida en el contexto de la contracultura de los años sesenta en Estados Unidos que se basa en el solucionismo tecnológico y defiende el liberalismo económico, el progreso científico-tecnológico, especialmente las nuevas tecnologías de la información como forma de emancipación y participación de la ciudadanía en la democracia, y que también rechaza las formas de intervención estatal.

La teorización del tecnopopulismo nace de la dificultad de encuadrar estos partidos en las categorías tradicionales de la ciencia política (Bickerton e Invernizzi, 2018): en particular, el Movimiento Cinco Estrellas y Podemos presentan una concepción tecnocrática de la política como resolución práctica de problemas concretos, con una visión utópica sobre las nuevas tecnologías de la información como herramientas de emancipación de la ciudadanía que pretenden fomentar su participación democrática y su protagonismo político real.

Según Bickerton e Invernizzi (2021), el tecnopopulismo se concibe, por tanto, como una nueva lógica para entender la política actual que sustituye progresivamente las prácticas y las teorías fundadas en las ideologías del siglo pasado. El cambio, todavía en curso, se produce primariamente en las democracias liberales de Occidente, donde la contienda electoral hace hincapié en torno a diferentes apelaciones al conocimiento científico para solucionar los “problemas del pueblo”, y no sobre la creación de horizontes de más largo alcance y las narraciones típicas de la política basada en referencias ideológicas preestablecidas.

Esto no significa que la lógica tecnopopulista elimine la política tradicional, sino que coexiste con ella; compiten juntas para solventar el malestar de un mundo lleno de incertidumbre e injusticias. La disputa se desplaza ahora hacia el aprovechamiento que cada opción política puede conseguir gracias a los avances científicos disponibles, pero el tecnopopulismo reivindica su ventaja comparativa para estar al paso con los tiempos, para amplificarse en las redes sociales e interceptar así los problemas reales de la ciudadanía, y por su capacidad y experiencia técnico-práctica para resolverlos con más eficacia.

En el tecnopopulismo, los expertos son considerados como servidores de la voluntad del pueblo y no del poder (Reed y Reed, 2023). Esa fórmula política se ha hecho más visible con la pandemia, pero en realidad es fruto de un proceso de pérdida de influencia de los principales actores políticos tradicionales (partidos, sindicatos y medios de comunicación) en los últimos 20 años, como una consecuencia de la creciente distancia entre el electorado (país real) y sus representantes institucionales (país legal).

El tecnopopulismo es, por tanto, una nueva forma de entender la competencia política en las democracias occidentales y el renova-

do protagonismo de la ciudadanía (Bickerton e Invernizzi, 2021). Es posible distinguir dos tipologías de tecnopopulismo: su versión más “pura”, referida a aquellos actores políticos cuyo discurso y estrategias de gobierno se ven afectadas por completo por esta lógica, como han sido los casos del Nuevo Laborismo en Inglaterra, de la República en Marcha de Emmanuel Macron en Francia, o del Movimiento Cinco Estrellas en Italia; una segunda tipología sería más bien la del “tecnopopulismo híbrido”, referido a aquellas formaciones que se mantienen fieles a sus raíces ideológicas, pero adoptan elementos de esta nueva lógica a nivel discursivo y organizativo, como es el caso de la Lega en Italia y Podemos en España.

Según Bickerton e Invernizzi (2021), la pandemia parece haber sido determinante en la evolución del tecnopopulismo en su dúplice configuración, al punto de poner en riesgo la política democrática o de minimizar cualquier posibilidad de que se vuelva a contar con bases ideológicas sólidas. Por su parte, Reed y Reed (2023) afirman que la pandemia evidenció también los límites del tecnopopulismo.

La expansión de la pandemia hizo que los expertos se vieran más afectados por ideologías u otro tipo de presiones, al impedirles desarrollar un asesoramiento científico imparcial: desapareció, de ese modo, la idea de que las personas expertas fueran mediadoras independientes entre los gobernantes y los ciudadanos.

A esta crisis de legitimidad de los profesionales y especialistas por parte de los ciudadanos han contribuido las múltiples crisis (económica, social, personal, generacional y cultural) que supuso la pandemia, cuando todos los aspectos de la vida social se redujeron a meros problemas sanitarios, epidemiológicos o de control de la movilidad y del orden público, sin considerar las implicaciones sociales (por ejemplo, en términos de aislamiento, la soledad no deseada y el impacto en la salud mental de las personas), provocadas por las políticas puestas en acto para frenar la propagación del coronavirus (Zielonka, 2021).

Durante la pandemia se pudieron ver también los efectos del tecnopopulismo en materia de políticas sociales, según Jäger y Zamora Vargas (2023) en el acuerdo entre tecnócratas y populistas por una renta básica universal para enfrentar las consecuencias sociales del parón económico en los colectivos más vulnerables. Intelectuales, académi-

cos, personalidades de diferentes ideologías, partidos políticos y organismos internacionales sostuvieron la propuesta.

Entre los apoyos declarados hacia esta medida destacaron, entre otros, los de Hilary Clinton, candidata demócrata a las presidenciales en Estados Unidos en 2016; Pim Fortuyn, fundador del partido populista de extrema derecha holandés la Lista Pim Fortuyn, así como de numerosos exponentes del Movimiento Cinco Estrellas y del Partido Pirata.

La renta básica encontró defensores tanto en la derecha ideológica, que ve en esta propuesta una forma de adelgazar el Estado de Bienestar y la burocracia, como en las fuerzas progresistas tradicionales, que la enlazan con una nueva fuente de recursos en una realidad económica cada vez más marcada por la automatización en los sistemas productivos y por la consecuente reducción del modelo asalariado de inclusión social (Jäger y Zamora Vargas, 2023).

El éxito de la renta universal se ha afirmado también en la región californiana de Silicon Valley, donde predomina la ideología del solucionismo (Morozov, 2013), de acuerdo con las declaraciones de Mark Zuckerberg, CEO de la empresa Meta, que apuesta por esta medida como una pieza clave del nuevo contrato social de las generaciones del siglo XXI, basado en el empleo de una inteligencia artificial potente y de tecnologías informáticas muy avanzadas.

Las transferencias monetarias a través de herramientas digitales parecen configurarse como la política social del futuro, en una democracia "líquida" (Bauman, 2010) donde el precariado político (Fernández-Albertos, 2018) ya no se siente representado por los partidos tradicionales y donde cada individuo, desde sus circunstancias particulares, es capaz de identificar, expresar y reivindicar sus propias necesidades a través de la red virtual, mejor que pasando por los laberínticos trámites burocráticos de los aparatos estatales (Jäger y Zamora Vargas, 2023).

La renta básica se ha instaurado así en el debate global como una herramienta útil para modernizar el Estado de Bienestar y para demostrar que la propuesta tecnopopulista es operativamente mucho más efectiva y más provechosa, en comparación con la acción política de los aparatos tradicionales de intermediación y representación política, que atraviesan una crisis de legitimidad ante los electores y presentan menores habilidades a la hora de competir en las redes virtuales y po-

ner el progreso científico al servicio de la ciudadanía (Bickerton e Invernizzi, 2021).

En España, Podemos es el caso de estudio más interesante para analizar cómo se ha llevado a cabo la propuesta tecnopopulista en política social. En su primer programa electoral para las elecciones europeas de 2014, la formación morada convirtió la renta básica en una de sus medidas más importantes (Arcarons et al., 2023). Sin embargo, una vez que llegó al Ejecutivo en 2019 (en coalición con el PSOE) contribuyó a formular una renta mínima cuyo objetivo era sostener a quienes se encontraban en situaciones de marginalidad o podían demostrar formalmente estar viviendo en riesgo de exclusión.

Y en efecto, esa medida implementada desatendió los principios inspiradores de la renta básica, que buscaba generar las condiciones materiales para que todos los ciudadanos disfrutaran de una vida digna y autónoma, independientemente de su situación en el sistema productivo y laboral (Raventós, 2021).

La pandemia aceleró la implementación de las rentas mínimas en Europa, especialmente en España. Antes de que llegara la COVID-19, el modelo de protección social español no se ajustaba a los nuevos riesgos sociales, puesto que no cubría satisfactoriamente las diferentes situaciones de dificultad laboral, salarial y de conciliación que aumentaron con la intensificación de la precariedad de la crisis del 2008-2014 (Moreno, 2017).

Como el español, diversos sistemas públicos de bienestar sufrían todavía los efectos de los recortes presupuestarios de ese periodo, que llevaron a la aparición de formaciones populistas como respuesta a la austeridad financiera (Bakirtzi et al., 2023). Aun así, los sistemas lograron revigorizarse durante la crisis pandémica, con nuevas políticas sociales y un recobrado protagonismo de las instituciones públicas de gobierno para atender esa emergencia, como explicaremos en los siguientes apartados.

Tecnopopulismo en España: del sentido común a la inteligencia colectiva

España fue uno de los países europeos más afectados por la crisis económica de 2008-2014 (Moreira et al., 2020). Las tasas de desempleo

aumentaron notablemente, así como el riesgo de pobreza entre las clases medias y trabajadoras, mientras que la necesidad de alcanzar la sostenibilidad financiera implicó severos recortes al gasto público para prestaciones sociales (pensiones, sanidad y educación). La adopción de políticas de austeridad presupuestaria coincidió con la aparición de diversos casos de corrupción política en los años de mayor inestabilidad financiera nacional.

Las formaciones populistas supieron capitalizar el descontento de la población por esta situación tan compleja de precariedad y de fuerte desilusión ciudadana hacia los representantes políticos (Bakirtzi et al., 2023). Cuando ya se empezaba a vislumbrar una salida de la crisis, en 2014 el populismo irrumpió en la escena política española con Podemos. Esta formación fue la primera que los politólogos describieron como populista, si bien los planteamientos populistas existían en el país antes de que estallara la burbuja inmobiliaria en 2008 (Rodríguez Sáez, 2021).

Podemos se ubicaba en la izquierda del espectro ideológico y se presentó como alternativa al régimen de la “casta”, vista como responsable de los efectos perniciosos que la gestión de la recesión económica tuvo en la sociedad (Piquer y Jäger, 2020). Este partido nació con el impulso del Movimiento 15-M, que ha tenido una presencia muy importante en la política española de los últimos diez años.

Podemos incorporó de forma institucional algunas de sus demandas más destacadas, como la renta básica universal y también aquellas instancias de transparencia y de lucha contra la corrupción que pretendían relanzar una buena gestión del bien común y, por ende, insistir en la defensa de un Estado de Bienestar fuerte.

La formación morada, junto con la aparición de Ciudadanos, partido liberal de centro, y más tarde con el amplio éxito electoral del partido ultraderechista VOX tras la crisis política territorial en Cataluña, evidenciaron la ruptura del bipartidismo en España. En este nuevo escenario más fragmentado nació el gobierno de coalición entre PSOE y Podemos en 2019, tras dos repeticiones electorales por la imposibilidad de obtener mayoría absoluta para conformar un Ejecutivo monocolor.

Los puntos principales del “Acuerdo de Gobierno Progresista”, sobre la base del cual se constituyó este primer Ejecutivo de coalición de

la democracia española, fueron una política económica centrada en el crecimiento sostenible y la implementación de unas políticas públicas orientadas a la reducción de las desigualdades sociales, con especial hincapié en la eliminación del trabajo precario.

Podemos propuso una amplia agenda de políticas sociales que, según Bakirtzi et al. (2023), representa el punto en común de varias formaciones populistas que surgieron tras la crisis económica anterior, sobre todo con la crisis de la socialdemocracia en el sur de Europa, como ejemplifican los casos de Syriza en Grecia y del Movimiento Cinco Estrellas en Italia.

La idiosincrasia política de Podemos es similar a la de estas formaciones. Si bien el partido morado ha sido considerado un caso de populismo de izquierda, también se le ha descrito como un ejemplo de tecnopopulismo híbrido (Bickerton e Invernizzi, 2021) o como un subtipo del tecnopopulismo de izquierdas (Piquer y Jäger, 2020).

La literatura reciente en ciencia política ha definido como tecnopopulista esta formación desde su surgimiento, principalmente por la dificultad de enmarcarlo dentro de las categorías de antisistema, anti-partidista y populista. Otro argumento se enlaza con su visión postmoderna, entendible como “utopía real” para la reconstrucción científica de nuevas fórmulas políticas (Wright, 2014), en torno a la posibilidad de contar con tecnologías novedosas para modificar los canales de participación directa de los ciudadanos en la arena política y revitalizar la democracia (Bickerton e Invernizzi, 2018).

Desde sus inicios, Podemos se caracterizó por ser una organización política anclada a la sociedad civil, en especial a los movimientos sociales surgidos a raíz del 15-M, que empleaba los medios virtuales para consultar permanentemente a sus bases sobre la orientación política que debía seguir la organización.

El tecnopopulismo en Podemos se aprecia también en la adopción, tanto por elección como por necesidad estratégica, de un discurso y de una organización que se basan en el conocimiento experto como herramienta para legitimarse políticamente (Piquer y Jäger, 2020). La adopción de elementos tecnocráticos responde a la oportunidad de presentarse como una formación competente para gobernar el país, a pesar de su reciente formación, en un escenario político dominado

hasta entonces por el bipartidismo desde la llegada de la democracia en España.

Los elementos tecnocráticos en Podemos son poco visibles (Piquer y Jäger, 2020), pero configuran su posición política a partir de la preeminencia de experiencias técnicas como fuentes competenciales, y de la presencia de lo que De la Torre (2013) denomina “expertos posneoliberales” y Standing (2013) describe como “profitécnicos”, eso es, nuevas élites de profesionales muy preparados al servicio de instituciones importantes en el ámbito del conocimiento (universidades) y de la nueva economía (empresas tecnológicas).

Tales expertos se caracterizan por ser profesionales procedentes del mundo académico.³ A diferencia de los tecnócratas neoliberales clásicos que se asocian a los organismos internacionales (por ejemplo, el Banco Central Europeo, el Banco Mundial o las grandes empresas multinacionales), disponen de un conocimiento interdisciplinar, curtidos en las experiencias directas de estudio y de trabajo, que ellos mismos consideran aplicables a la hora de orientar políticas públicas y sociales.

Estos expertos buscan representar el interés general y no a determinados sectores de la población. Su modelo de gobernanza se basa en la intervención pública a través de medidas de redistribución de la riqueza, en la ecología política, dado que pretenden alcanzar el “buen vivir”, en el fomento de la democracia participativa y en el empleo de formas alternativas a la epistemología occidental, en las que el diseño y la implementación técnica de las políticas públicas sirva a la agenda política del gobierno (De la Torre, 2013).

El elemento central que hizo que Podemos fuera reconocido como una formación tecnopopulista fue el uso de la noción de “sentido común”, que se contraponía a la ideología como forma de solucionar los problemas de la gente. Esta herramienta discursiva les permitió conectar la tecnocracia con el populismo, pues adoptaban el conocimiento ciudadano y buscaban soluciones corrientes, al alcance de la comprensión y de la utilidad del electorado, que se llevaban en la cotidianidad y se pretendían trasladar a las políticas públicas. Esta

3 Podemos ha sido llamado también el “partido de los profesores” (Bickerton e Invernizzi, 2018). Desde sus inicios ha contado en sus filas con profesores e investigadores universitarios de las facultades de ciencia política y sociología.

concepción de *expertise* se contraponía, por tanto, al modelo económico implementado en la anterior crisis económica, en sus formas y sustancias (Bickerton e Invernizzi, 2018).

El tecnopopulismo de Podemos se observó también en el cambio de sus posiciones con respecto a los organismos internacionales: durante su permanencia en el Ejecutivo nacional, la formación morada adoptó políticas que estaban amparadas por organismos internacionales (como el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo) que conformaban parte de aquella misma “casta” que pretendían contrarrestar cuando entraron en el parlamento español en 2015.

Esto significa que Podemos, como socio minoritario del Ejecutivo de coalición, asumió la lógica tecnocrática dominante en la política contemporánea, según la cual los actores políticos se deben presentar como competentes y administrar el Estado de la mano de los organismos internacionales (Piquer y Jäger, 2020).

El cambio de estrategia generó malestar entre sus bases. Específicamente, hubo tensiones en las redes sociales y los medios de comunicación sobre el mantenimiento de la propia coalición de gobierno y sobre la continuidad de la figura de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo como líder de Podemos.

Durante los años de emergencia sociosanitaria por COVID-19, el tecnopopulismo se convirtió en una fórmula política cada vez más presente, como muestra el caso de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social desde enero de 2020, vicepresidenta segunda del gobierno de coalición con el PSOE desde julio de 2021 y actual ministra de Trabajo del gobierno de coalición entre PSOE y Sumar, tras las elecciones generales de 2023.

Díaz constituye un claro ejemplo de tecnopopulismo debido a la aprobación desde su ministerio de medidas de protección social que vinculó a su experiencia y formación en relaciones laborales y derecho del trabajo, y que evidenciaron cómo la política nacional cuenta cada vez más con competencias expertas para buscar soluciones efectivas a los problemas sociales y legitimarse ante la ciudadanía (Lavezzolo, 1 de junio de 2022).

Otro de los elementos que refleja también el carácter tecnopopulista es el proceso de escucha y concertación con los actores sociales realizado por Sumar para conformar su proyecto político para las elecciones generales de 2023, a la que concurrió también Podemos en coalición junto a otras formaciones de izquierda; aunque tras diferentes desencuentros dentro del grupo parlamentario de Sumar, la formación morada acabó en el grupo mixto del Congreso de Diputados.

Este proceso de diálogo social evidenció el sentido tecnopopulista de Sumar, porque su objetivo era presentarse fuera de esquemas ideológicos y atender directamente las necesidades ciudadanas más urgentes tras los duros golpes de la pandemia (Lavezzolo, 1 de junio de 2022). El proceso de escucha se basó en la creación de más de 30 grupos de trabajo con miembros de la sociedad civil. Se trata de una forma alternativa a la política de partidos (principalmente se secundan las directivas consultadas y ratificadas con las bases de los afiliados), por el uso que se hace de la inteligencia colectiva: la novedad fue recoger el conocimiento de los ciudadanos sobre asuntos que les competían directamente, evitando así las decisiones *top-down* desde las jerarquías de la organización política (Baylos y Loffredo, 2023), en un ejercicio de transparencia y de construcción del consenso desde una lógica *bottom-up*.

Algunos autores reconocen que las políticas sociales implementadas durante la pandemia desde el ala de Podemos, sobre todo desde el Ministerio de Trabajo a cargo de Yolanda Díaz, no supusieron en realidad una ruptura o una alternativa al modelo establecido por el bipartidismo (Bazitker et al., 2023). Pero su implementación, de la mano de la iniciativa conjunta con el socio de gobierno (el PSOE), dio lugar al llamado “Escudo Social”, un conjunto de políticas sociales para proteger a los colectivos más vulnerables de la sociedad de los efectos del parón de la economía provocados por los confinamientos de la población, e impuestos durante todos los estados de alarma que caracterizaron la crisis sanitaria.

El paquete de estas medidas constituye el ejemplo concreto de cómo parte del discurso tecnopopulista se transforma en una iniciativa de gobierno, en el marco de un Ejecutivo de coalición, que en parte reajusta sus mismos principios fundacionales.

¿Hacia un nuevo modelo de gobernanza?

España ha sido uno de los pocos países europeos donde el tecnopopulismo llegó al poder prácticamente justo al mismo tiempo que estalló la pandemia por COVID-19 (Saccà y Selva, 2023). El discurso electoral y programático de Podemos, a partir del empuje del movimiento 15-M, pasó de la defensa de la ciudadanía frente a los abusos de una “casta” corrupta a tener que priorizar la gestión de una emergencia sociosanitaria de la mano del conocimiento experto junto al PSOE, partido que criticaba por formar parte del bipartidismo tradicional y que en su opinión ya no representaba al “país real” (Aguilar y Romanos, 2019).

La gestión de la pandemia implicó la necesidad de confiar en el conocimiento médico y científico disponible en salud pública y epidemiología (Piquer y Jäger, 2020). Pedro Sánchez gobernó contando con las indicaciones de la ciencia médica, que definió como su única ideología (Saccà y Selva, 2023) y empleó a la hora de legitimar la toma de decisiones impopulares para limitar los contagios y frenar la propagación del virus (el confinamiento obligado, las limitaciones de la movilidad y el bloqueo forzoso de sectores productivos no esenciales). Sin embargo, hay matices importantes que considerar.

Según la investigación realizada por Saccà y Selva (2023) —sobre los liderazgos de Emmanuel Macron en Francia, Giuseppe Conte en Italia y Pedro Sánchez en España—, los dos primeros fueron claros exponentes de tecnopopulismo durante la pandemia, no así en el caso del español.

Francia e Italia centraron su discurso en las competencias técnicas para legitimarse, con tono paternalista y rasgos populistas. El PSOE y Podemos tomaron medidas para sostener el sistema sanitario público ante el aumento exponencial de los contagios, pero basaron también su planteamiento político en la oportunidad de reforzar el Estado de Bienestar y la protección social para los colectivos más vulnerables.

Otro elemento diferencial respecto a los dos casos nacionales transalpinos está ligado a la configuración del gobierno, puesto que el PSOE es un partido tradicional que se ha opuesto a la deriva populista en sus últimas campañas electorales, en especial a Podemos, antes de la formación del gobierno de coalición en 2019.

Bickerton e Invernizzi (2021) explican que Sánchez se ha visto influido por el tecnopopulismo de Tony Blair, exponente del Nuevo Laborismo: su liderazgo destaca por el uso de símbolos vinculados a la socialdemocracia de la así llamada “tercera vía” y por el empleo del *welfare* como forma de gestionar la crisis sanitaria (Saccà y Selva, 2023).

La pandemia fue también una ocasión para que el presidente español agilizara su agenda política, al introducir en el debate político y en el programa de gobierno cuestiones importantes como la igualdad de género, las desigualdades socioeconómicas y la solidaridad intergeneracional, dado que la COVID-19 no afectó por igual a toda la población.

A este respecto, el gobierno PSOE-Podemos utilizó la crisis pandémica para mostrar una forma diferente de hacer política, distinta a las políticas de austeridad implementadas durante la crisis de 2008-2014; se insistió también en la necesidad de no considerar al conjunto de la ciudadanía dentro de un único bloque uniforme (premisa típicamente populista) y en la oportunidad de reforzar el Estado de Bienestar, en dirección contraria a cuanto hicieron Conte y Macron con sus políticas tecnocráticas (Saccà y Selva, 2023).

Las limitaciones de la politización de la ciencia en el caso de la gestión sanitaria del gobierno español se evidenciaron en las últimas oleadas de la pandemia, con la prórroga de diferentes estados de alarma, que seguían imponiendo medidas estrictas de control de la movilidad ciudadana y provocaban malestar en la población y diferentes movilizaciones de protesta. En especial, estas tensiones y movilizaciones de protesta se observaron durante la campaña de vacunación, debido a las suspicacias de la población ante la rapidez con la que se obtuvo la vacuna para la COVID-19.

Frente a las tensiones que crecían en el electorado se apostó por reforzar el Estado de Bienestar: la aprobación del llamado “Escudo Social” por parte del gobierno de coalición resultó una estrategia para contrastar los golpes de la pandemia y también una forma de paliar el descontento difuso de la ciudadanía, con vista a que las medidas de protección tomadas en circunstancias coyunturales de emergencia se incorporasen de forma estable en un sistema público de inclusión social que pudiera mantenerse incluso una vez que la emergencia pandémica fuese superada.

Aprobación e implementación del “Escudo Social”

El “Escudo Social” pretendía proteger a la ciudadanía frente a las consecuencias sociales más acuciantes generadas por el parón económico impuesto con el prolongado mantenimiento del estado de alarma. Una de las principales políticas de contraste a los efectos de la COVID-19 en el sistema productivo y de empleo nacional fueron los ERTes (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo).

Esta medida tenía por objetivo proporcionar una prestación económica a todos aquellos trabajadores que corrieran riesgo de ser despedidos durante la pandemia por el bloqueo de la actividad productiva en determinados sectores considerados no esenciales, tales como los servicios ligados al turismo, los comercios y el sector de la construcción.

Asimismo, el gobierno aprobó una paralización de los despidos motivados por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción durante la emergencia sanitaria y protegió a aquellos profesionales autónomos que se vieron obligados a suspender su trabajo o cuyos volúmenes de negocios se habían afectado (Moraire et al., 2020).

Diversos ejercicios comerciales y numerosas empresas individuales golpeadas por la pandemia vieron congelada la obligación de contribuir a la seguridad social durante seis meses y se beneficiaron de una moratoria de tres meses con respecto a los pagos hipotecarios vinculados a sus negocios.

Esta medida en particular muestra cómo Podemos incluyó también como beneficiarios de sus políticas a determinados colectivos que consideraba parte de la denominada “casta”; esto es, una élite neoliberal y capitalista que a menudo criticaba por perseguir intereses privados que, en opinión de la formación morada, contrastaban con los derechos colectivos de bienestar y de inclusión (Bazitker et al., 2023).

En enero de 2022 entró en vigor una nueva Reforma Laboral (con el Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de Julio) que propuso medidas urgentes para la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Con esa iniciativa legislativa se modificó la Ley del Estatuto de los Trabajadores y se lograron importantes resultados en términos de estabilización contractual, reducción de la temporalidad

dad laboral y crecimiento del empleo de calidad desde los primeros meses de su vigencia (Baylos y Loffredo, 2023).

Para Bazitker et al. (2023), la reforma laboral no coincidía plenamente con el programa electoral de Podemos para las elecciones generales de 2019, pero desde luego permitió alcanzar resultados positivos en ese periodo tan convulso, como evidencian los datos de la Encuesta de Población Activa realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2024b): el aumento del salario mínimo interprofesional (de 950 euros en 2020 a 1.080 en 2023); la reducción de la tasa de desempleo (del 15.5% al 12.1% entre 2020 y 2023); y el crecimiento del número de afiliados a la Seguridad Social, con respecto al nivel previo a la pandemia (de 19.408.538 afiliados en Julio de 2019 a 20.734.042 a finales de 2023).

A estas políticas se añade la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (Moreira et al., 2020), la medida más importante y trascendente que el gobierno PSOE-Podemos adoptó en los primeros meses más duros de la pandemia, y que explicamos a continuación con mayor detalle.

La apuesta por el Ingreso Mínimo Vital

La tasa de riesgo de pobreza (60% de la mediana de los ingresos) en España era igual al 20.8% en 2019, el año anterior a la pandemia. Una de las tareas pendientes en el sistema de bienestar nacional era proveer una red de asistencia efectiva que combinase políticas activas y transferencias monetarias para apoyar a los colectivos que se encontraban en estas condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. La lucha contra la pobreza estaba presente en la agenda del gobierno de coalición PSOE-Podemos que surgió de las elecciones generales para la XIV legislatura, celebradas el 10 de noviembre de 2019, y se volvió urgente con la llegada de la pandemia.

El Ingreso Mínimo Vital ha sido, por este motivo, una de las medidas que ha centrado mayor atención y expectativas en el debate público para atender las necesidades de inclusión social de la población a riesgo de pobreza en España. Se trata de una prestación condicionada para luchar contra la pobreza, a través de una asignación monetaria mensual y de programas de empleabilidad e inserción laboral para las personas beneficiarias.

El IMV se aprobó con amplio apoyo parlamentario pocos meses después del primer estado de alarma generado por la COVID-19. Contó también con un gran consenso social, si bien no estuvo exento de críticas desde ambos espectros partidistas. Desde la izquierda se entendió como una prestación que no ponía fin a la trampa de la pobreza, y que la renta básica hubiera podido proporcionar más libertad a las personas, sin la necesidad de que se comprobaran previamente los recursos de cada solicitante (Babiker y Briales, 2022; Raventós, 2021). Las críticas desde la derecha —aunque el Partido Popular (PP) la aprobó con el objetivo de poder realizarle enmiendas— iban dirigidas a cómo se entendía implementar esta medida (Babiker y Briales, 2022), puesto que no alcanzaba el número de hogares e individuos a los cuales estaba destinada.

El partido ultraderechista Vox criticó el IMV porque entendía que iba a desincentivar el empleo en la población activa y, al mismo tiempo, podía suponer un “efecto llamada” para las personas inmigrantes, al considerar que esta prestación se debería destinar únicamente a ciudadanos españoles (Panaro et al., 2023).

El IMV ya estaba incluido en el acuerdo del gobierno progresista antes del inicio de la pandemia. Sin embargo, su implementación no estaba prevista para ese momento, sino una vez que la legislatura estuviera más avanzada. Con esta medida se puso fin a la excepción de España en materia de rentas mínimas a nivel nacional y se siguió el camino de la Carta Social Europea (Babiker y Briales, 2022). De hecho, España, Portugal e Italia pidieron la introducción de una renta mínima a nivel comunitario durante la pandemia (Euractiv, 11 de mayo de 2020).

El planteamiento de esta prestación fue objeto de disputa dentro del Ejecutivo de coalición porque había sido pensada de forma diferente en los programas electorales de ambas formaciones políticas: en Podemos pasó de la propuesta de una renta básica universal a una renta mínima con pocas condiciones, junto con amplias prestaciones por hijo a cargo y con una propuesta de prestación por trabajo; en cambio, la propuesta principal del PSOE en su programa electoral de 2019 era la reducción de la pobreza infantil (Panaro et al., 2023).

Finalmente, el IMV fue diseñado de forma conjunta por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Pablo Iglesias, y por el Ministerio de Inclusión Social y Migraciones, encabezado por

Josè Luis Escrivà (figura tecnocrática e independiente adscrita al PSOE, que había sido Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal entre 2014-2020), a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social.

Ambos propiciadores políticos de esta medida mantenían posturas contrapuestas sobre la oportunidad de considerarla de carácter emergencial o permanente: el PSOE quería introducir programas de formación y empleo que aumentaran la condicionalidad de la IMV, mientras que Podemos pretendía asimilar esta medida a la introducción de un nuevo derecho social que no estuviera vinculado a la situación laboral de las personas beneficiarias.

Ambos estaban de acuerdo, sin embargo, en la necesidad de que el IMV redujera las diferencias existentes entre las rentas de inserción gestionadas a nivel autonómico y destinadas a las personas y hogares que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas (Babiker y Briales, 2022).

En las últimas elecciones generales del 23 de julio de 2023, para la XV legislatura del gobierno de España, el IMV mantuvo su relevancia y fue incluida en los programas electorales de las tres formaciones de izquierda más importantes a nivel estatal: PSOE, Podemos y Sumar, coalición presidida por Yolanda Díaz, donde confluyó Unidas Podemos después del voto.

La referencia expresa a esta medida apunta a su permanencia como una prestación clave en la lucha contra la pobreza en el Estado de Bienestar español. Y así se desprende del nuevo gobierno nacional resultante (otra vez presidido por Pedro Sánchez), pero con una coalición configurada ahora por PSOE y Sumar, donde ambas comparten en su agenda de gobierno la necesidad de ofrecer un ingreso mínimo o renta garantizada para el futuro.

El IMV ha generado gran debate en España y a veces la opinión pública la confunde con la renta básica universal, porque mantiene su mismo esquema (Mantyneva y Hiilamo, 16 de febrero de 2024). En la arena política, en un momento de consenso entre populistas y tecnócratas sobre la conveniencia de reformar el sistema del bienestar nacional, la adopción de rentas mínimas en España y Europa se ha visto

acelerada por los efectos negativos que tuvo la austeridad financiera en la exacerbación de la precariedad laboral y en el debilitamiento de los servicios públicos primero, y en el parón económico que sobrevino con la pandemia más tarde.

Su mantenimiento se ha vuelto imprescindible en el segundo gobierno de coalición con vistas a una necesaria transformación del Estado de Bienestar ante el incremento de las desigualdades sociales, la progresiva automatización y deslocalización del sistema productivo y el emergente fenómeno de la Gran Renuncia al mercado de trabajo (*big dismissing*) (Vittoria, 2021), que se empezó a notar en algunos sectores económicos, aunque sin alcanzar los preocupantes niveles que se registraron en Estados Unidos durante los años de COVID-19 (Paradela, 24 de abril de 2023).

Tales indicios vislumbran un escenario donde el IMV se mantendrá en el futuro, dado que se trata de una iniciativa con tintes populistas que se ha justificado por razones políticas, para que no colapsara el tejido social con una ulterior precarización de los estratos más vulnerables, y que ha sido apoyado por los tecnócratas que avalaron su introducción y su continuidad en pos de un sistema de inclusión social más sólido para los años venideros.

El IMV tardó unos meses en aplicarse, pero junto con otras transferencias monetarias (como por ejemplo las pensiones por jubilación) ha contribuido a paliar el riesgo de pobreza en la población más desfavorecida: según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2024a) el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social disminuyó hasta el 26% en 2022, casi dos puntos menos que el año anterior (27.8%).

El problema de la pobreza no se ha solucionado y la proporción de la población española con este riesgo sigue siendo muy alta: la evidencia empírica demuestra que el IMV debería mantenerse (y si procede, mejorarse). Esto significa que una medida sostenida por un partido tecnopopulista y estrenada en España por la emergencia pandémica podrá replicarse y consolidarse en un sistema público de inclusión que sea estable y duradero.

Queda configurada entonces una nueva estructura del sistema de bienestar que un gobierno de coalición ha planteado de acuerdo con

los cambios que aquí hemos analizado. Cabe suponer que la sostenibilidad financiera de esta medida y su diseño más o menos condicional definirán sus formas de implementación por parte de los ejecutivos que regirán las próximas legislaturas.

Conclusiones

Durante la crisis pandémica, el populismo y la tecnocracia se afirmaron como los principales ejes de la política contemporánea, en línea con una tendencia de cambio en las formas tradicionales de pensar y hacer política en los últimos 20 años. A través del presente artículo, hemos observado cómo durante la COVID-19 no desaparecieron las formaciones populistas, sino todo lo contrario.

Las iniciativas políticas animadas por esta fórmula se han revitalizado gracias a su combinación con apelaciones al conocimiento experto, como forma de legitimarse electoralmente ante la ciudadanía. De hecho, en los años de pandemia aumentó el número de actores políticos tecnopopulistas en las democracias occidentales que cuentan con competencias científicas y profesionales, que les permite ofrecer respuestas a los problemas sociales más acuciantes y evitar así cualquier posición ideológica predeterminada.

El incremento de actores que emplean este tipo de discurso y organización política ha llevado a considerar a diversos autores en el ámbito de las ciencias políticas y sociales que nos encontramos ante una nueva lógica política, en la que la ideología parece haber dejado paso al conocimiento científico-técnico como fuente de autoridad en las competiciones electorales, y de cara a los escenarios de gobierno más deseables en tiempos de incertidumbre y crisis permanente.

En España, nuestro caso de estudio, la influencia de esta lógica se observó nítidamente en el caso del partido Podemos. La formación entró en la escena política a raíz de la crisis financiera estallada en 2008 y se presentó como alternativa al bipartidismo político propuesto con la transición democrática cuarenta años atrás, y a las políticas de austeridad implementadas entre 2010 y 2015.

Tales políticas debilitaron el Estado de Bienestar español, como se pudo observar en las políticas sociales adoptadas durante la primera oleada de la COVID-19, y fuertemente condicionadas por los recortes

presupuestarios realizados en la crisis económica anterior, que habían mermado los recursos del sistema sanitario nacional, profundizaron las desigualdades sociales existentes y aumentaron el número de personas y familias con riesgo de pobreza.

Podemos se puede entender como un caso de tecnopopulismo híbrido, dado que mantiene sus raíces ideológicas, se presenta como una formación competente para resolver los problemas sociales y se mueve con soltura en las redes sociales, en contacto con los movimientos sociales (desde el 15-M hasta las Mareas Ciudadanas) que se gestaron durante la crisis económica anterior.

Por ello, la formación morada —dentro del gobierno de coalición que configuró con el PSOE durante los años de COVID-19— constituye uno de los pocos casos de estudio en Europa donde el tecnopopulismo ha llegado al Ejecutivo y ha tenido que gestionar de forma urgente la sobrevenida crisis pandémica: sólo dos meses después de conformar el gobierno de coalición se declaró el primer estado de alarma por coronavirus.

El estudio de las políticas sociales implementadas por este gobierno durante la emergencia sanitaria, en particular el análisis del Ingreso Mínimo Vital como parte del “Escudo Social” aprobado para proteger a los colectivos más expuestos a los efectos negativos de la pandemia, nos ha permitido observar la influencia determinante del tecnopopulismo en la agenda política del gobierno español.

De hecho, todos los Ejecutivos de coalición presididos por Pedro Sánchez desde el 2020 han contado con la alianza, no siempre fácil pero efectiva, entre populistas y tecnócratas sobre la necesidad de implementar una renta mínima a nivel nacional y reforzar el sistema de protección social. En este sentido, el caso español muestra las dificultades de introducir la renta básica universal y cómo el IMV, como su sucedáneo, ha pasado de ser un modelo contrapuesto al populismo a formar parte de los puntos prioritarios en la agenda política.

A pesar de las dificultades estratégicas encontradas, la necesidad de reforzar el Estado de Bienestar ha sido el argumento que el gobierno nacional de coalición empleó como aglutinante para generar cohesión social y legitimidad política durante la pandemia, con el intento de apaciguar las protestas que surgieron por las medidas impopulares

de confinamiento y restricción a la movilidad, en pos de salvaguardar la salud pública.

Asimismo, la pandemia justamente proporcionó condiciones de emergencia y de incerteza que precisaban de una intervención efectiva y, en consecuencia, aceleraron la ejecución de políticas inclusivas y efectivas.

Esta investigación nos ha permitido además constatar cómo el tecnopopulismo es una lógica muy presente en España en la actualidad, como muestra el movimiento Sumar, liderado por la actual Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el nuevo gobierno de coalición desde 2023. Este nuevo proyecto político se creó a través de un proceso de escucha basado en la creación de grupos de trabajo que buscaban encauzar la inteligencia colectiva de la ciudadanía en el marco de un nuevo modelo de partido, y relanzar una idea de gobierno más participada y consensuada con las bases sociales, sin ningún sesgo ideológico vinculante.

Por este motivo, Sumar es una nueva fórmula política tecnopopulista que, gobernando junto con el PSOE, declara ofrecer continuidad y consolidar los pilares del Escudo social implementado en la pandemia, estructurando un sistema de protección social duradero y sostenible, entre los cuales destaca el IMV. Una medida que ha abierto la puerta a la reflexión en el debate público español sobre la transformación del Estado de Bienestar tras años de recortes presupuestarios, y una iniciativa innovadora para regenerar la inclusión social y afianzar la ciudadanía a una forma de hacer política que atiende a sus problemas más urgentes.

Queda por ver qué consecuencias supondrá desplazar las ideologías por la tecnocracia y, sobre todo, saber cuáles resistencias o sinergias estarán dispuestos a desplegar los partidos tradicionales ante el discurso populista, sin renegar de la necesidad de reforzar la defensa de los colectivos más débiles en nuestra sociedad.

El análisis politológico deja abierto muchos escenarios sobre estas cuestiones que será conveniente seguir investigando en el futuro, pues la literatura sobre el tecnopopulismo presenta diferentes perspectivas teóricas que conceptualizan este concepto de forma diferente y se caracteriza también por ser escasa en cuanto al impacto de esta fórmula política en España, en concreto sobre su impacto en políticas sociales.

Este artículo abre, por tanto, una línea de investigación sobre la agenda de políticas sociales llevada a cabo por formaciones tecnopopulistas para profundizar en esta relación todavía no muy estudiada, no sólo en el caso español, sino también en otras latitudes, donde se produjeron sinergias entre tecnócratas y populistas durante la crisis sanitaria.

Referencias

- Aguilar, S. y Romanos, E. (2019). El alcance de los cambios. Una propuesta analítica sobre las consecuencias de los movimientos sociales. *Revista Española de Sociología*, 28(1), 151-159. <http://dx.doi.org/10.22325/fes/res.2018.54>
- Arcarons, J., Bollain, J., Raventós, D. y Torrens, L. (2023). *En defensa de la renta básica. Por qué es justa y cómo se financia*. Deusto.
- Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef). (15 de junio de 2023). *Segunda Opinión Ingreso Mínimo Vital*. <https://www.airef.es/es/centro-documental/segunda-opinion-sobre-el-ingreso-minimo-vital/>
- Babiker, S. y Briales, A. (2022). Entre el Ingreso Mínimo y la Renta Básica: disputas sobre el gobierno de la pobreza en España durante la Gran Interrupción. *Política y Sociedad*, 59(2), e75366. <https://doi.org/10.5209/poso.78021>
- Bakirtzi, E., Menegatti, E., Ruiz, A.B.M. y Porras, M.S. (2023). Populism and Social Law: The Case of Southern Europe. *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations*, 39(1), 71-96. <https://dx.doi.org/10.54648/ijcl2023005>
- Barbrook, R. y Cameron, A. (1996). The Californian Ideology. *Science as Culture*, 6(1), 44-72. <https://doi.org/10.1080/09505439609526455>
- Bauman, Z. (2010). *Vida líquida*. Paidós.
- Baylos, A. y Loffredo, A. (2023). El “Proceso de Escucha” de Sumar y la Propuesta de Regulación del Trabajo. *Rivista Diritti Lavori Mercati*, 1, 220-231. https://www.ddllmm.eu/wp-content/uploads/2023/08/DLM.int-1_2023-4-chronicles-Baylos-Loffredo.pdf
- Bertsou, E. y Caramani, D. (2022). People Haven't Had Enough of Experts: Technocratic Attitudes among Citizens in Nine European Democracies. *American Journal of Political Science*, 66(1), 5-23. <https://doi.org/10.1111/ajps.12554>

- Bickerton, C. J., y Invernizzi, C. I. (2018). 'Techno-populism' as a new party family: the case of the Five Star Movement and Podemos. *Contemporary Italian Politics*, 10(2), 132-150. <https://doi.org/10.1080/23248823.2018.1472919>
- Bickerton, C. J. y Invernizzi, C. (2021). *Technopopulism. The New Logic of Democratic Populism*. Oxford University Press.
- Bregman, R. (2017). *Utopía para realistas. A favor de la renta básica universal, la semana laboral de 15 horas y un mundo sin fronteras*. Editorial Salamandra.
- De la Torre, C. (2013). El tecnopopulismo de Rafael Correa: ¿Es compatible el carisma con la tecnocracia? *Latin American Research Review*, 48(1), 24-43. <https://muse.jhu.edu/pub/101/article/504727>
- Del Pino, E. y Rubio, M.J. (2013). *Los estados del bienestar en la encrucijada. Políticas sociales en perspectiva comparada*. Editorial Tecnos.
- Deseriis, M. (2017). Technopopulism: The Emergence of a Discursive Formation. *triple C: Communication, Capitalism & Critique. Open Access Journal for a Global Sustainable Information Society*, 15(2), 441-458. <https://doi.org/10.31269/triplec.v15i2.770>
- Esmark, A. (2021). How does crisis affect the conflict between technocracy and populism? Lessons from the COVID-19 pandemic. *Politics*, 43(4), 520-535. <https://doi.org/10.1177/026339572111049965>
- Euractiv. (11 de mayo de 2020). Portugal, Spain, Italy call for common EU minimum income. *Euractiv*. <https://www.euractiv.com/section/politics/news/portugal-spain-italy-call-for-common-eu-minimum-income/>
- Fernández-Albertos, J. (2018). *Anti-sistema. Desigualdad económica y precariado político*. Los Libros de la Catarata.
- Gerbaudo, P. (2018). Social media and populism: an elective affinity? *Media Culture & Society*, 40(5), 745-753. <http://dx.doi.org/10.1177/0163443718772192>
- Gerbaudo, P. (2023). *Controlar y proteger. El retorno del Estado*. Verso Libros.
- Goodwin, M. (22 de Julio de 2022). Populismo: rientrati nei ranghi? *Istituto per gli Studi di Politica Internazionale*. <https://www.>

ispionline.it/it/pubblicazione/populismi-rientrati-nei-ranghi-37072

- Instituto Nacional de Estadística. (INE). (2024a). *Encuesta de Condiciones de Vida (ECV). Año 2023 resultados definitivos*. <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/ECV2023.htm>
- Instituto Nacional de Estadística. (INE). (2024b). *Encuesta de Población Activa (EPA). Cuarto trimestre de 2023*. <https://www.ine.es/dyngs/Prensa/EPA4T23.htm>
- Jäger, A. y Zamora Vargas, D. (2023). *Welfare for Markets: A Global History of Basic Income*. University of Chicago Press.
- Lavezzolo, S. (1 de junio de 2022). Yolanda Díaz y el tecnopopulismo. *elDiario.es*. https://www.eldiario.es/piedrasdepapel/yolanda-diaz-tecnopopulismo_132_9043921.html
- Lipow, A. y Seyd, P. (1995). Political parties and the challenge to democracy: From steamengines to techno-populism. *New Political Science*, 17(1-2), 295-308. <https://doi.org/10.1080/07393149508429755>
- Mantyneva, P. y Hiilamo, H. (16 de febrero de 2024). Exploring Novel direct payments during the pandemic: A Gateway to Universal Basic Income. *The Social Policy Blog*. <https://socialprotection.org/es/discover/news/exploring-novel-direct-payments-during-pandemic-gateway-universal-basic-income>
- Moreira, A., León, M., Coda Moscarola, F. y Roumpakis, A. (2020). In the eye of the storm... again! Social Policy responses to COVID-19 in Southern Europe. *Social & Policy Administration*, 55(2), 349-357. <https://doi.org/10.1111/spol.12681>
- Moreno, L. (2017). Nuevos riesgos, nuevas desigualdades. En M. Kölling, P. Mari-Klose (coords.), *Los retos del Estado del Bienestar ante las nuevas desigualdades* (pp. 13-34). Fundación Manuel Giménez Abad. <https://www.fundacionmgimenezabad.es/es/publicaciones/los-retos-del-estado-del-bienestar-ante-las-nuevas-desigualdades>
- Morozov, E. (2013). *To save everything. Click here. The Folly of Technological Solutionism*. Public Affairs.
- Panaro, A., Shahini, V. y Jessoula, M. (2023). *The politics of minimum income schemes reforms in seven European countries. EUROSHIP Working Paper N° 31*. <http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.23276288>

- Paradela, A. (24 de abril de 2023). 5 mitos sobre la Gran Dimisión. *Observatorio de RRHH*. <https://www.observatoriorh.com/al-dia/5-mitos-gran-dimision.html>
- Piquer, J. y Jäger, A.M.M. (2020). After the Cartel Party: 'Extra-Party' and 'Intra-Party' Techno-Populism. *Politics and Governance*, 8(4), 534-544. <https://doi.org/10.17645/pag.v8i4.3444>
- Raventós, D. (2021). *La renta básica ¿Por qué y Para qué?* Los Libros de la Catarata.
- Reed, C. y Reed, M. (2023). *Enough of experts. Expert authority in crisis*. Walter de Gruyter GmbH.
- Riba, J. (2021). *Crisis permanente. Entre una fraternidad huérfana y una democracia insurgente*. Ned Ediciones.
- Rodríguez Saéz, A. (2021). La génesis del populismo en España entre 2011 y 2013: un análisis desde la demanda. *REIS: Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 173, 121-140. <https://doi.org/10.5477/cis/reis.173.121>
- Saccà, F. y Selva, D. (2023). Techno-populism, Expertise and the Welfare State: Giuseppe Conte, Emmanuel Macron and Pedro Sánchez. En F. Saccà y D. Selva (eds.), *European Political Leaders and the Social Representation of the Covid-19 Crisis: Leading the Pandemic* (pp. 85-181). Springer Nature. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-38380-9>
- Standing, G. (2013). *El precariado. Una nueva clase social*. Ediciones de Pasado & Presente.
- Standing, G. (2018). *La renta básica. Un derecho para todos y para siempre*. Ediciones de Pasado & Presente.
- Vittoria, A. (2021). La sostenibilità di una politica social income-based: gli effetti del reddito di cittadinanza sullo spazio di intermediazione del terzo settore. Una prima analisi sui piani di inserimento sociale e progetti utili alla comunità. *Impresa Sociale*, 3, 18-28. <https://www.iris.unina.it/handle/11588/611407>
- Wright, E.O. (2014). *Construyendo utopías reales*. Ediciones Akal.
- Zielonka, J. (2021). Who should be in charge of pandemics? Scientists or Politicians? En G. Delanty (ed.), *Pandemics, Politics and Society. Critical Perspectives on the COVID-19 Crisis* (pp. 58-73). Walter de Gruyter GmbH.